

**SIGUE FALTANDO UNA ESTRATEGIA INTEGRADA Y ALTERNATIVA
PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS**

Rubén M. Lo Vuolo¹

El dato más llamativo del escenario económico posterior al abandono de la regla de la Convertibilidad, es la brutal caída de los ingresos de los trabajadores. Esto, junto con el aumento de precios, elevó la pobreza por encima de 50% de la población y bajó los costos labores a pisos inéditos en décadas. El *default* transitorio de la deuda pública con ciertos acreedores privados y el control de las tarifas de los servicios públicos privatizados, se sumaron a un contexto internacional favorable. Así, el rebote de la actividad económica fue empujado por los exportadores y la sustitución de importaciones en ciertos sectores con capacidad ociosa. El superávit fiscal quitó presiones monetarias gracias al congelamiento de gastos y al aumento de impuestos por la propia inflación y las retenciones a las exportaciones.

La salida de la regla Convertibilidad se administró con elementos muy similares a los que alimentaban aquel régimen: mayor endeudamiento y baja de la masa salarial. Ya sea por la ausencia de una estrategia articulada, la falta de convicción o el deslumbramiento de los impactos inmediatos de ciertas medidas, no se aprovechó este ambiente excepcional para cambiar los principios de organización del régimen de acumulación heredado de los años '90s, postergando problemas hacia un futuro que ya está muy cerca. La caída del nivel de actividad industrial del mes de abril es un dato preocupante de la coyuntura, pero más aún lo son cuestiones estructurales como la crisis energética y la persistencia de un ambiente de inusitada exclusión social.

Estos problemas no se resuelven con cambio de precios relativos y manejo atento de la coyuntura. Requieren de cambios de institucionalidad de regulación de las relaciones económicas y sociales. Como ejemplo, puede afirmarse que la crisis energética no emerge por falta de producción, sino por el arbitrario manejo de un grupo concentrado de empresas de la cadena energética. Que esto suceda en un país productor y exportador de hidrocarburos refleja que el problema no es económico sino de mala regulación de mercados muy concentrados. Permitir que el precio interno de los recursos energéticos se siga ajustando a los internacionales significa renunciar a las ventajas comparativas naturales del país, resignando un factor clave de la competitividad del conjunto del sistema económico. Al impacto seguro sobre precios hay que sumar un negativo efecto sobre las expectativas y planes empresarios.

¹ Director e Investigador Principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp)

Con la misma racionalidad son necesarios cambios estructurales en las políticas distributivas, especialmente la tributaria, la de previsión social y el conjunto de las políticas sociales. Aquí también se requiere una institucionalidad alternativa a la heredada, que permita superar el manejo coyuntural y segmentado de las políticas públicas, para definir una estrategia integrada y sistémica. Esta estrategia tiene que vincular de forma positiva un patrón distributivo más igualitario con un nuevo régimen de acumulación y de demanda efectiva que sea menos dependientes de factores exógenos y grupos concentrados de poder. Esta sigue siendo la principal morosidad de la política económica y social del actual gobierno.